

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Fabio Nelson Hincapié Muñoz – sucesores procesales: Orfilia María Rodríguez Jiménez (cónyuge) Liset Johana Hincapié Rodríguez, Carlos Alberto Hincapié Rodríguez y Jhony Andrés Hincapié Rodríguez (hijos)
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado Dieciocho Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 018 2016 00274 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 0155 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Nulidad de dictamen y otorgamiento de retroactivo por pensión de invalidez
DECISIÓN	Confirma decisión

En la fecha, **dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promoviera en su contra el señor **Fabio Nelson Hincapié Muñoz y ante su deceso, continuaron como sucesores procesales: Orfilia María Rodríguez Jiménez (cónyuge), Liset Johana Hincapié Rodríguez, Carlos Alberto Hincapié Rodríguez y Jhony Andrés Hincapié Rodríguez (hijos).** Radicado único nacional 05001 3105 **018 2016 00274** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **020** , que se plasma a continuación:

Antecedentes

El demandante convocó a juicio a Colpensiones, buscando la declaratoria de nulidad del dictamen 2015108784DD del 24 de agosto de 2015, en lo que respecta a la fecha de estructuración, y con ello establecésele una PCL de origen común, sustentada en la historia clínica. En consecuencia, pidió se condenara a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, incluyendo las mesadas adicionales correspondientes a junio y diciembre, así como los intereses moratorios, la indexación y las costas.

En su argumentación, relata que mediante Resolución GNR 413611 del 21 de diciembre de 2015, Colpensiones le otorgó pensión de invalidez a partir del 6 de agosto de 2015, considerando total de 1.380 semanas y un porcentaje de PCL del 56,62%, estructurada en dicha calenda, conforme a la calificación efectuada el 24 de agosto de 2015 por el grupo médico de la entidad. Esgrime que la prestación se debió dar desde fecha anterior de conformidad con la verdadera data en la que se le determinó la pérdida.

En auto del **05 de septiembre de 2016**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enterada, Colpensiones allegó su contestación, en la cual admitió el contenido del acto administrativo que le reconoció la pensión de invalidez. En relación con los demás supuestos, manifiesto que se aceptaban siempre y cuando fueran acreditados mediante pruebas idóneas. **Se opuso a la prosperidad de las pretensiones** y formuló las **excepciones de mérito** que denominó: firmeza del dictamen de calificación de invalidez, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar

retroactivo pensional, improcedencia de intereses de mora, imposibilidad de condena en costas, prescripción, buena fe y compensación.

Tras el fallecimiento del señor Fabio Nelson Hincapié Muñoz el 04 de enero de 2022, y el otorgamiento de poder por parte de su cónyuge, Orfilia María Rodríguez Jiménez y sus hijos Liset Johana Hincapié Rodríguez, Carlos Alberto Hincapié Rodríguez y Jhony Andrés Hincapié Rodríguez, en proveído del 10 de marzo de 2023, el despacho de conocimiento dispuso la sucesión procesal de estos en relación con el causante.

La primera instancia culminó con la sentencia proferida el 13 de julio de 2023, por **el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito**, en la que acogió el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el cual le determinó al señor Fabio Hincapié Muñoz una pérdida de capacidad laboral del 58,55%, estructurada el 22 de enero de 2015. En consecuencia, condenó a Colpensiones a pagar a la masa sucesoral del señor Hincapié la pensión de invalidez desde el 9 de marzo al 6 de agosto de 2015, calculando el retroactivo en la suma de \$3.320.936,00. Además, dispuso la indexación y se autorizaron los descuentos a salud. Absolvió del pago de intereses moratorios y declaró no probada la excepción de prescripción. Impuso costas a cargo de Colpensiones y a favor de la parte actora

La falladora argumentó que el dictamen decretado cumplía con los requisitos del artículo 226 y 228 del C.G.P. Además, resaltó que su contenido era preciso, exhaustivo y detallado, teniendo en cuenta la historia clínica, exámenes y ayudas diagnósticas, y que se aplicaron los requisitos y procedimientos para la calificación de la invalidez según lo consagrado en el Decreto 1507 de 2014. A pesar de no haber sido posible realizar una valoración física debido al fallecimiento, la experticia de la Junta permitió establecer que la fecha de estructuración de la pérdida de

capacidad laboral era el 22 de enero de 2015, momento en que se emitió el concepto de rehabilitación de ortopedia. En contraste, la fecha establecida por Colpensiones para el 6 de agosto de 2015 carecía de sustento clínico y no se fundamentó adecuadamente.

Por tanto, concluyó que la parte demandante tenía razón en lo pretendido y condenó al reconocimiento y pago del retroactivo causado. Se aclaró que dicho retroactivo debía otorgarse desde el 9 de marzo de 2015, debido a las incapacidades presentadas por el señor Fabio hasta el 8 de ese mismo mes y año. En consecuencia, se dispuso el pago de \$3.320.936,00 por concepto de mesadas no canceladas entre el 9 de marzo y el 8 de agosto de 2015, cuando Colpensiones finalmente le otorgó el derecho, al no haber operado el fenómeno extintivo de la prescripción, elaborarse el dictamen el 24 de agosto de 2015, la solicitud presentarse el 30 de septiembre del mismo año y la demanda instaurarse el 29 de febrero de 2016. Ordenó la indexación de la suma en favor de la masa sucesoral y autorizó los descuentos a salud.

Inconforme, la apoderada de Colpensiones interpuso y sustentó un recurso de alzada, buscando la revocatoria. Para ello, argumentó que la sentencia tiene serios errores que afectan la sostenibilidad financiera del sistema. Afirmó que, a pesar de estar en firme el dictamen que determinó la merma de capacidad laboral elaborado por la entidad, el actor no interpuso los recursos legales pertinentes para mostrar su desacuerdo, entendiéndose que aceptó implícitamente el contenido del experticio, y con base en este, fue que se le concedió la prestación con el retroactivo correspondiente. Finalmente, sostuvo que actuó de buena fe y acatando la ley y los reglamentos de la institución, sin poder irse en contra de los mismos.

De la etapa de **alegaciones** ante esta instancia hizo uso **Colpensiones**, esgrimiendo que la entidad emitió dictamen en el que calificó la pérdida de capacidad laboral del demandante, sin que este expresara su inconformidad frente a la fecha de estructuración, por tal se entiende que el mismo quedo en firme y conforme a él se le reconoció pensión de invalidez al demandante, actuando la entidad bajo los parámetros legales y la buena fe. Pide que no se le condenen las costas.

Demandante, requiere la confirmación de la sentencia, al haberse probado mediante medio de convicción idóneo fecha de estructuración de invalidez diferente a la tenida en cuenta por la demandada.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Son hechos debidamente acreditados en los autos respecto al señor Fabio Nelson Hincapié: que **nació el 19 de agosto de 1959 y falleció el 04 de enero de 2022**. Fue calificado por Colpensiones el **24 de agosto de 2015**, con una **pérdida de capacidad laboral del 56,61% estructurada el 06 de agosto de 2015**, valorándose el diagnostico de "otras ganartrosis secundarias". El 30 de septiembre de 2015, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, concedida en Resolución GNR413611 del 21 de diciembre de 2015, a partir del 6 de agosto de 2015, en cuantía de \$679.128,00. Durante el trámite del proceso de decretó la valoración del actor, la cual se llevó a cabo post mortem por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 20 de abril de 2023. En dicha evaluación, se le asignó una PCL del 58,55%, desde el 22 de enero de 2015, por la misma patología revisada previamente por la demandada.

Conforme a lo anterior, **el problema jurídico** se centra en determinar la eficacia probatoria de la experticia rendida en el curso del proceso en comparación con el practicado por Colpensiones a fin de establecer si al demandante le asistía en vida el derecho al reconocimiento y pago retroactivo de la pensión de invalidez, tal y como se determinó en primera instancia.

Pues bien, debe decirse que la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-873 de 2013 ha considerado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común.

Así, atendiendo la Jurisprudencia Constitucional, la determinación de la merma de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, dicha evaluación puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino también, de patologías que resulten de la evolución posterior de esta padecimiento o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

De la misma manera dicha corporación ha establecido reglas procedimentales básicas que rigen las actuaciones de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral, y que conforman los contenidos mínimos del derecho fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellas: "ii) **La valoración del**

estado de salud de la persona calificada debe ser completa e integral, pues las juntas deberán proceder a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente” (sentencias T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

Ahora bien, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de establecer, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante, lo señalado en esta disposición legal, ninguna duda queda que tales dictámenes pueden ser debatidos judicialmente, en tanto, es posible que dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar, por cualquier medio probatorio, los errores en que pudo haber incurrido una pericia, atendiendo que, en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley (SL, 19 oct. 2006, rad. 29622, SL, 27 mar. 2007, rad. 27528, SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, SL, 30 abr. 2013, rad. 44653, SL16374-2015, CSJ SL5280-2018, SL4571-2019, SL1958-2021 y SL5694-2021). De acuerdo con ello, las partes tienen libertad probatoria, pudiendo demostrar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba.

Esta controversia es posible, por cuanto dichas experticias “*no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada*”, dado que ello solo ocurre con el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que “*implica el desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final -la sentencia-, llamado a definir el punto controvertido con fuerza de verdad legal*”

(SL1958-2021), por lo que para el caso sería una entidad diferente a Colpensiones al haberse presentado inconformidad por parte del demandante frente al dictamen rendido por la misma, la encargada de determinar la pérdida de capacidad laboral, pues así fue previsto por el propio legislador, siendo estos experticios los medios de convicción idóneos para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, *ítems* que, en principio se tienen como invariables, no por el hecho de que tales aspectos exijan una determinada solemnidad, que desde luego no la tienen, sino porque establecerlos requiere de unos conocimientos técnicos y científicos de los que carece el operador judicial, razón por la cual el legislador, se insiste, los difirió a organismos especializados en el tema.

Sobre la revisión de la pérdida de capacidad laboral, atendiendo a que la invalidez es un criterio susceptible de progresividad o regresividad, pues con él se pretende determinar si una persona está o no materialmente en situación de invalidez, se ha pronunciado el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, indicando en la SL3008-2022, que:

"es absolutamente factible que, dada la evolución de las patologías, la aparición de nuevos diagnósticos de un mismo origen o de una génesis diversa, pueda no solo determinarse en forma inicial un porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino también revisarse en el sistema de seguridad social o por vía judicial una calificación que ya está en firme o realizarse una calificación integral que incluya factores comunes y laborales, con el fin de dictaminar la situación material de invalidez de una persona, lo anterior, con las características propias que supone cada uno de estos trámites de calificación."

Teniendose establecido por la jurisprudencia especializada que cuando se controvierte un dictámen, el operador judicial está sujeto a tomar en su integridad el que de manera objetiva le de mayor credibilidad y certeza sobre los puntos debatidos, sin que pueda configurar uno propio a su acomodo, tomando datos de uno y otro, y dado que, la juez de instancia

atendiendo las consideraciones del caso, accedió a la solicitud de parte y ordenó la calificación integral del demandante, la cual fue realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien como ya se dijo en experticia **determinó que el señor Fabio Hincapié presentaba una PCL 58,55% estructurada el 22 de enero de 2015.** Valorándose el diagnóstico de "otras gonartrosis secundarias", para lo cual se basó en la revisión de la historia clínica y los documentos que respaldaban la existencia de dicha enfermedad, coincidiendo la fecha en que se le estableció la merma con la que se emitió el *"concepto de rehabilitación de Ortopedia por artrosis de rodilla"*.

De acuerdo al contenido del dictamen, se tiene que la calificación realizada esta acorde con las deficiencias baremadas, ofreciendo plena credibilidad a la Sala. Adicional a que es de destacar que la data para la cual se establece la merma coincide con la rehabilitación que se le otorgó por ortopedia, específicamente el 22 de enero de 2015, sin que el rendido por Colpensiones tenga sustento o justificación o por lo menos no se probó el por qué tomó el 6 de agosto de 2015 como la fecha determinante para la calificación.

Es importante resaltar que la valoración realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez no puede ser modificada, no solo porque los jueces carecen de los conocimientos técnicos necesarios para hacerlo, sino también porque la jurisprudencia especializada es clara en indicar que:

si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros, así se explica en sentencia SL1021–2019 radicado 62309 del 27 de marzo de 2019

Así las cosas, al ser el medio de convicción anotado el idóneo para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración, al haber sido emitido por organismo especializado en el tema y autorizado por el legislador, estar sustentado en la historia clínica, y contar con la solidez suficiente para derruir las conclusiones anteriores, procedente resulta darle validez al mismo. En consecuencia, se confirmar la sentencia en cuanto dispuso la nulidad del dictamen emitido por Colpensiones, así como en cuanto concedió la pensión de invalidez desde el 22 de enero de 2015, ya que el señor Fabio acreditó mediante la historia laboral que entre esa fecha y el mismo día y mes de 2012 acumuló un total de 154,44 semanas, lo cual es suficiente para hacerse acreedor a la prestación.

Por otro lado, se toma en cuenta que existen pruebas que indican que Fabio tuvo incapacidades pagas hasta el 8 de marzo de 2015, por lo que el pago de la prestación debe realizarse a partir del 9 de marzo hasta el 6 de agosto de 2015, lo cual resulta en un retroactivo de \$3.320.936,00, cantidad idéntica al cálculo efectuado por la juez de instancia, debiéndose indicar que para el caso no ha hecho aparición el fenómeno extintivo de la prescripción de que tratan los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, en tanto, cuando de pensiones de invalidez se trata, el término empieza a correr desde la calenda en que se hace la notificación del dictamen, pues, no basta con la ocurrencia de un hecho dañoso para que la obligación adquiera la connotación de "*exigible*", sino que además es necesario que el daño sea "*cierto*", esto es, que no esté en un plano meramente eventual e hipotético, obteniéndose la certeza a partir del diagnóstico realizado por la autoridad competente para ello, lo cual ocurrió dentro del trámite del proceso.

En consecuencia, procedente resulta confirmar la sentencia emitida en cuanto dispuso el reconocimiento y pago de la prestación desde el 22 de enero de 2015, al acreditar, según historia laboral aportada entre dicha fecha y el mismo día y mes de 2012, con un total de 154,44 semanas, cúmulo suficiente para hacerse acreedor a la prestación. Ahora, se toma en cuenta que existen pruebas que indican que Fabio tuvo incapacidades pagas hasta el 8 de marzo de 2015, por lo que la cancelación de la prestación debe realizarse a partir del 9 de marzo hasta el 6 de agosto de 2015, cuando se le otorgó la prestación por parte de la demandada, lo cual resulta en un retroactivo de \$3.320.936,00, monto idéntico al de la providencia revisada.

La suma a cancelar por concepto de retroactivo, deberá ser actualizado mediante la figura de la indexación hasta la data en que efectivamente se verifique el pago total de la obligación, ello, atendiendo lo establecido en los artículos 48 y 53 superiores, los principios de equidad y justicia, adicional a que es el criterio actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en aras de restablecer el poder adquisitivo del beneficiario, el cual ha sido depreciado debido al fenómeno inflacionario presente en la economía nacional. En este aspecto, se ratifica la decisión tomada en primera instancia, así como en cuento autorizó los descuentos con despido a salud.

Costas en esta instancia a Cargo de Colpensiones, inclúyanse como agencias en derecho al suma de \$1.160.000,00.

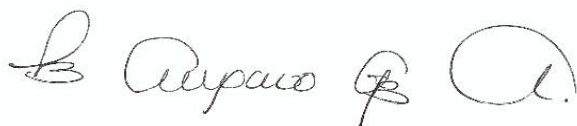
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de esta

ciudad dentro del proceso ordinario promovido por **Fabio Nelson Hincapié Muñoz, y ante su deceso, continuaron como sucesores procesales: Orfilia María Rodríguez Jiménez (cónyuge), Liset Johana Hincapié Rodríguez, Carlos Alberto Hincapié Rodríguez y Jhony Andrés Hincapié Rodríguez (hijos),** en contra de **Colpensiones.**

Costas en esta instancia a Cargo de Colpensiones, inclúyanse como agencias en derecho al suma de \$1.160.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día,** en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

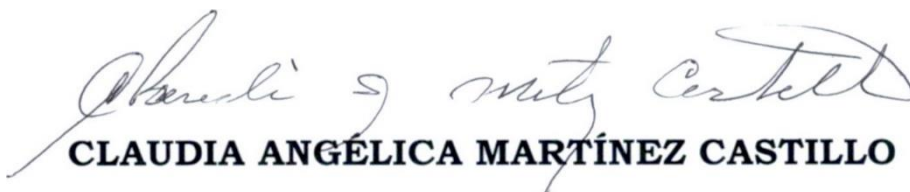
Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO